

Desde Chiapas, un diagnóstico
Lorenzo Meyer

El problema de la confianza

El contradictorio, insuficiente pero finalmente real avance del sistema electoral, va disminuyendo la ilegitimidad de origen del régimen mexicano y de sus gobiernos, producto de 60 años de elecciones sin competencia o sin credibilidad. Pero el terreno ganado a la ilegitimidad por la vía electoral lo está ocupando, casi al mismo ritmo, otro enemigo de la modernidad, la estabilidad política y del buen gobierno: la desconfianza del ciudadano de sus autoridades y del entramado institucional en general.

La confianza social, dice Francis Fukuyama, "es la expectativa que surge dentro de una comunidad de comportamiento normal, honesto y cooperativo, basada en normas comunes, compartidas por todos los miembros de dicha comunidad" (Confianza. Las virtudes sociales y la capacidad de generar prosperidad, Madrid, Atlántida, 1996, p.45). Finalmente, esta confianza es el capital social de la comunidad; un capital creado históricamente y transmitido por mecanismos culturales de una generación a otra. El capital social es tan importante o más que el propio capital económico, pues es a partir del primero que se puede generar el segundo y que logra su plena expresión y desarrollo el tercero: el capital humano.

México, como sistema político, jurídico y económico, vive en una situación de déficit profundo de confianza.

La actitud normal del ciudadano frente a la autoridad, sea ésta el Presidente o el policía, el juez o el burócrata con algún poder de decisión, es la desconfianza. De entrada, el ciudadano supone que las acciones de quien detenta el poder estarán guiadas no por las reglas legales ni, menos, por la honestidad profesional del funcionario, sino por reglas informales, discrecionales, cuya guía es el interés personal o de grupo, pues la honestidad e imparcialidad casi están ausentes en la cultura mexicana del poder. Es claro que el comportamiento honesto en los círculos del poder puede ocurrir y de hecho ocurre, pero más como excepción que como una regla producto de la interiorización de una ética de respeto, servicio y solidaridad con el ciudadano y la comunidad.

Después de lo que sucedió con el multimillonario Programa Nacional de Solidaridad en el sexenio pasado, con los Tesobonos que desembocaron en el "error de diciembre" y hundieron el solemne compromiso electoral de "el bienestar de tu familia" o con el escándalo por 585 mil millones de pesos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, ¿se puede confiar en un comportamiento honesto, cooperativo y respetuoso de la autoridad respecto del ciudadano o la comunidad? Como en toda sociedad, en la nuestra hay ganas profundas de creer, de confiar, pero las encuestas de opinión pública nos dicen que entre 15 categorías, el

mexicano prefiere depositar la mucha o poca confianza que haya podido acumular, en su familia (la madre y el padre), luego en el maestro y en los ministros del culto religioso y al final, pero muy al final, en el juez, el cacique, el militar y el político. Para el 50 por ciento de los mexicanos los políticos son incapaces, pero eso no es lo peor, sino que para el 84 por ciento esos políticos son también corruptos y únicamente una minoría del público, el 6 por ciento, los caracteriza como honestos y, por tanto, confía en ellos, (Banamex-Accival, México social, 1994-1995. Estadísticas seleccionadas, México, 1996, pp. 666 y 669). Esa desconfianza del mexicano en la autoridad no es más que un mecanismo de autodefensa y un resultado natural de la experiencia individual e histórica.

Cuando el 16 de julio, y tras cuatro meses de silencio, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), por medio del subcomandante Marcos, hizo público un largo documento cuyo punto central es la imposibilidad de confiar en el gobierno y, por tanto, de volver a negociar con él, sin intermediarios, no hizo sino expresar de manera radical y desde una perspectiva particular, una actitud muy generalizada en la sociedad mexicana.

Un punto de partida

Al examinar el problema que representa para el gobierno y para el país en general la rebelión armada del EZLN, el observador, para su análisis, no tiene más remedio que partir de una premisa tan simple como fundamental: desde la perspectiva militar, las fuerzas en choque -el Ejército federal y el EZLN- son tan dispares que el conflicto simplemente no tiene sentido. Desde esa lógica de la fuerza, el Ejército federal tiene todas las posibilidades de ganar y de manera rápida y contundente. En Chiapas, las Fuerzas Armadas del gobierno tienen una superioridad sobre su enemigo indígena de 20 ó 30 a uno, incluso más, según las diferentes cifras que han aparecido en los medios de información o que se pueden recoger en los círculos cercanos al conflicto. Además de las diferencias de efectivos, está la de equipos y preparación. De un lado están unas cuantas armas automáticas y el resto son rifles y pistolas .22, escopetas de caza, poca munición, algunos equipos de radiocomunicación, fornituras viejas, como alimentos, los propios de las regiones pobres y atrasadas de México: maíz y frijoles y un entrenamiento sobre el terreno. Del otro lado, únicamente hay armas automáticas, munición en abundancia, transportes, vehículos blindados, artillería ligera, helicópteros, aviones, equipos sofisticados de comunicación y de rastreo; la alimentación es buena (incluye raciones del Ejército norteamericano), servicio médico y, finalmente, el Ejército federal no sufre recortes en su financiamiento y sí, en cambio, lleva a cabo compras sistemáticas de equipo en Estados Unidos por varios millones de dólares y centenares de sus efectivos reciben entrenamiento "de punta" en la tristemente célebre Escuela de las Américas de Fort Benning y en la Academia Internacional de la Fuerza Aérea, de Lackland, Texas. ¿Por qué, entonces, el problema entre ambos ejércitos no se ha resuelto en unas horas o, a lo más, en unos días mediante eso que se supone es la esencia del Estado moderno: el monopolio de la violencia legítima?, pues así lo permite la descomunal asimetría de las fuerzas enfrentadas. La respuesta puede parecer

muy simple, pero no por ello deja de ser cierta: en las condiciones actuales, la supuesta violencia legítima del Estado mexicano... ¿no es legítima! No puede arreglar por la fuerza el problema chiapaneco sin pagar un alto costo político nacional e internacional.

Una política hecha de contradicciones

Al estallar la rebelión chiapaneca el 1o. de enero de 1994, el gobierno encabezado por Carlos Salinas traía encima la ilegitimidad de su origen: las elecciones del '88. "Ganar la Presidencia desde la Presidencia", fue el lema del salinismo -así lo hizo Manuel Avila Camacho hace medio siglo-, pero al final no le resultó, y ese problema de origen le ató la mano militar y sólo le dejó libre la política, que no quiso usarla más que para ganar tiempo y heredar el problema a su sucesor: Ernesto Zedillo.

La elección de Zedillo en ese decisivo año de 1994 no estuvo empañada por un gran fraude similar al del '88, pero tampoco fue una elección legítima: hace cuatro años, el PRI dispuso de tantos recursos económicos, que la asimetría entre el viejo partido de Estado y sus contendientes fue equivalente a la asimetría que hoy se da entre el Ejército federal y el EZLN.

Una vez en una Presidencia a la que llegó sin proponérselo, por accidente, Zedillo no supo qué política seguir frente a Chiapas. En el inicio, buscó la negociación directa con el EZLN (encuentros entre Esteban Moctezuma, el hombre de confianza del Presidente, y el subcomandante Marcos), pero de manera inesperada, dio un giro de 180 grados e intentó el golpe espectacular y por sorpresa con apoyo de fuerzas especiales: el fallido intento de captura del subcomandante Marcos por paracaidistas mientras tenía lugar un intercambio de correspondencia.

Tras tan desafortunado principio, se inició una larga negociación con gran desgano gubernamental, buscando menos un arreglo y más que el tiempo corriera, bajo el supuesto que corría en contra de los insurgentes por estar éstos cercados y con una base social pobre en extremo.

Casi sin proponérselo, el 16 de febrero de 1996 el gobierno federal firmó finalmente con los representantes del EZLN los Acuerdos de San Andrés Larráinzar y con base en ellos los legisladores de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) presentaron una iniciativa de ley sobre la autonomía de las comunidades indígenas. Sin embargo, en diciembre, la iniciativa no se fue al Congreso porque el gobierno volvió sobre sus pasos, desechó lo aprobado y ofreció, en cambio, una contrapropuesta, situación no contemplada en el arreglo original. A partir de ese momento el diálogo entre los contendientes quedó empantanado, pero eso no significó inacción, al contrario.

La estrategia sugerida en un documento de la Secretaría de la Defensa y publicado hace tiempo por la revista Proceso, proponía desde 1994 la creación de

grupos de civiles que actuaran contra el EZLN. La idea nada tenía de nueva, ya había sido puesta en práctica cuando menos 30 años atrás, por el gobierno del Distrito Federal, cuando organizó el grupo paramilitar de "Los Halcones" para reprimir la protesta estudiantil sin tener que utilizar la fuerza pública y evadiendo la responsabilidad de la represión. El resultado de esta decisión y su puesta en marcha en Chiapas, es el surgimiento de organizaciones como Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA), Paz y Justicia, Máscara Roja o Chinchulines. Del primero se sabe que da entrenamiento militar entre tres y cuatro veces al mes a jóvenes indígenas y les paga alrededor de 850 pesos mensuales para cumplir con una meta específica: "chingar a cualquier guerrillero" (Reforma, 9 de julio). Claro que el secretario de Gobernación asegura que tales organizaciones simplemente no existen (Reforma, 10 de julio), pero el procurador ya se ha comprometido a investigar el tema, forzado por la presión de organizaciones defensoras de los derechos humanos (Reforma, 14 de julio).

A fin de cuentas, la existencia de los paramilitares se confirmó con la matanza de Acteal del 22 de diciembre de 1997, llevada a cabo por civiles antizapatistas con anuencia del gobierno local. Ante la fuerte reacción nacional e internacional, las Fuerzas Armadas tuvieron que volver al primer plano y llevaron a cabo entonces incursiones de fuertes columnas de soldados y policías contra algunos "municipios autónomos"; es decir, contra las organizaciones que sirven de apoyo al EZLN. El resultado fueron prisioneros, vejaciones, destrucción y robo en poblados ya de por sí miserables y, finalmente, en El Bosque, muertos. Algunos caídos en acción y otros, quizá, ejecutados.

En estas condiciones, la solución negociada de un conflicto que se prolonga ya por cuatro años y medio, se vuelve cada vez más difícil. Una de las partes -la más débil- ya no tiene confianza en la otra -la más fuerte- que parece preferir no negociar sino actuar en el campo donde tiene toda la ventaja: en el de la fuerza. En el EZLN, como en la sociedad mexicana en su conjunto, la desconfianza es un mecanismo de defensa y producto tanto de la memoria histórica colectiva como de la experiencia directa.

La desconfianza y sus razones

Tras cuatro meses de silencio, el comunicado del EZLN del 16 de julio mantiene el estilo peculiar del subcomandante Marcos -mezcla de análisis político, literatura, humor, irreverencia e imprevistas desviaciones (¿el espíritu del '68?)- pero en su parte sustantiva busca exponer las razones en que funda su desconfianza y, por tanto, su negativa a aceptar la propuesta del gobierno del diálogo directo -en esa propuesta también hay humor, pero involuntario, y envuelto en el estilo solemne de la burocracia- sin intermediación y a pesar del incumplimiento de lo firmado en 1996.

Las razones del EZLN para rechazar el diálogo con el gobierno, que no con la representación plural del Poder Legislativo (la Cocopa) y con la sociedad, son el incumplimiento de lo ya firmado y los actos de violencia del gobierno contra

comunidades indígenas: Aguas Blancas (1995), Acteal (1997), El Charco, Unión Progreso y Chavajeval (1998). El documento refuerza su postura con la acusación de que la política económica actual equivale a una guerra contra los sectores más débiles de la sociedad mexicana; en materia de pobreza, se dice, estamos en el mismo sitio que hace 30 años. Y la lista de acusaciones sigue: la soberanía nacional ha sido destruida por las concesiones que los gobiernos del neoliberalismo han hecho a Estados Unidos y a las grandes fuerzas del mercado internacional. Todo lo duro que son las autoridades con los observadores extranjeros ligados a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, son de obsequiosas con los representantes del gran capital financiero internacional. El gran aparato de la violencia estatal, el Ejército, está dividido: por un lado, se dedica a librar una guerra sin gloria contra los indígenas (con asesoría extranjera) y, por el otro, lleva la guerra contra el narcotráfico, ayuda a la población en casos de desastre y tiene bajas apagando incendios forestales; un Ejército dividido entre la herencia de Victoriano Huerta y la de Felipe Angeles, según el subcomandante. En cualquier caso, ya quedó lejos la declaración de guerra al Ejército en su conjunto hecha en enero de 1994, hoy el choque es con el Presidente y su equipo; los Orives y los leones a los que hace referencia.

Un problema de fondo

El documento del EZLN del 16 de julio concluye invitando, una vez más, al resto de la sociedad a sumarse al esfuerzo de los indígenas por conducir la nave mexicana -un Arca de Noé- usando el viento que hoy sopla a favor de libertad, democracia y justicia. Hay ahí un llamado para que la sociedad mexicana tenga confianza en los zapatistas, en su ética y en su sentido común.

El llamado es comprensible pero se enfrenta a un problema teórico y práctico de difícil solución. Desde que dejaron de tener vigencia las grandes visiones de la revolución mundial y las alternativas al capitalismo, la izquierda puede enumerar y analizar los grandes problemas nacionales -problemas en aumento- pero no puede lograr, con igual facilidad y contundencia, dibujar la alternativa. El subcomandante diagnostica bien el mal que padece México, pero hasta hoy ni él ni nadie dispone de una fórmula alternativa tan precisa como la neoliberal que usa Zedillo.